



REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL CIRCUITO DE TUNJA

Tunja, trece (13) de septiembre de dos mil dieciocho (2018).

Referencia: **ACCIÓN POPULAR –**
Radicación: 15001 33 33 004 2018 00044 00
Accionante: Mauricio Alejandro de la Masa Vargas
Accionado: Municipio de Tunja-Consorcio Plan Bicentenario CH
Tercero: Nación-Ministerio de Cultura.

TEMAS DE DECISIÓN:

Procede el Despacho a resolver sobre i) la solicitud de coadyuvancia presenta por el abogado Juan Sebastián Ramírez Gracia, ii) la vinculación del Consejo Nacional de Monumentos deprecada por el actor popular y iii) la solicitud de vinculación del Concejo Municipal de Tunja y de la Academia Boyacense de Historia.

DE LA COADYUVANCIA.

El abogado Juan Sebastián Ramírez García solicitó ser tenido en cuenta como coadyuvante de la parte demandante en este proceso (fls. 160-167).

Al respecto, debe señalarse que la coadyuvancia es la figura procesal que permite a un tercero apoyar los argumentos expuestos por alguna de las partes de un debate judicial. Tratándose de acciones populares, el artículo 24 de la Ley 472 de 1998 autoriza a toda persona natural o jurídica, coadyuvar estas acciones, antes de que se profiera el fallo de primera instancia; de igual modo, prevé que la misma opera hacia la actuación futura, es decir, que el interviniente debe tomar el proceso en el estado en que se encuentre.

Frente a la aplicación de esta figura, en el ámbito de las acciones populares, el Consejo de Estado ha establecido que *“La intervención le permitirá al interviniente, en calidad de parte, ejercer las facultades que procesalmente corresponden a ésta, pero sin excederlas, pues el coadyuvante auxilia o ayuda a la parte principal, pero su ejercicio se limitada al marco de las pretensiones del demandante, sin que pueda adicionarlas, ni trae hechos que la parte principal no llevo al debate.”*¹

De acuerdo con lo anterior, la Alta Corporación argumentó que si bien la coadyuvancia en materia de acciones populares dista de la regulada por el artículo 71 del CGP, al no requerir la comprobación de una relación sustancial con una de las partes, por cuanto aquellas propenden por la protección de derechos colectivos de los cuales, el interviniente también es titular, esta circunstancia no implicaba que el codyuvante pudiera establecer una demanda con pretensiones, hechos y derechos distintos a los planteados por el accionante, porque **la coadyuvancia busca contribuir, asistir o ayudar a la consecución de la defensa de los derechos colectivos invocados por el actor.**

Pues bien, la presente acción constitucional se encuentra encaminada a la protección de los derechos colectivos al goce del espacio público y utilización de defensa de los bienes de uso público, la defensa del patrimonio público, y la defensa del patrimonio cultural de la nación, lo cuales se ven vulnerados por las intervenciones a la Plaza de Bolívar,

¹ CE. SCA. SII – Subsección B, consejero ponente: Gerardo Arenas Monsalve, Bogotá, D.C., veintisiete (27) de marzo de dos mil catorce (2014), radicación número: 68001-23-33-000-2014-00036-01(AC).

autorizadas por el Ministerio de Cultura, mediante la Resolución No. 1710 de 2017, y que con ocasión del contrato de No. 1440 de 2017 se encuentra en ejecución; en especial, la construcción de las baterías de baños públicos subterráneos en el costado oriental de dicha plaza.

A juicio del actor, la anterior vulneración se configura, por cuanto las intervenciones al Centro Histórico desconocen la Ley 63 de 1959 y, principalmente, porque la materialización de dichos baños, conlleva a la destrucción de unos túneles, que según el actor, atraviesan dicho lugar y constituyen patrimonio histórico y cultural de la Nación. En consecuencia, pretende que *“...se ordene al Municipio de Tunja... suspender inmediatamente los trabajos e intervención de las obras adelantadas por esta entidad pública en el suelo y subsuelo de la Plaza de Bolívar de Tunja...”*

En ese orden de ideas, la coadyuvancia se admitirá, pero, únicamente, respecto a los argumentos que guarden relación con los derechos, hechos y pretensiones planteados por el accionante en el escrito introductorio, y por tanto, no habrá lugar a estudiar el derecho a la moralidad administrativa, como tampoco ninguno de los hechos y argumentos que sustentan su vulneración.

SOLICITUDES DE VINCULACIÓN.

Del Consejo Nacional de Monumentos Nacionales

El actor popular solicitó la vinculación del Consejo Nacional de Monumentos Nacionales, con sustento en la Ley 163 de 1959, según la cual, a este ente le correspondía la conservación y protección de los monumentos nacionales y, por tanto, debía pronunciarse respecto a si el municipio de Tunja pidió autorización para efectuar obras modernas en el centro histórico (fls. 215-216 cuaderno de medidas cautelares).

En relación con lo anterior, es preciso mencionar que el Consejo Nacional de Monumentos Nacionales fue creado por el artículo 23 de la Ley 63 de 1959, norma que en su artículo 17, le otorgó la potestad de autorizar la reparación, reconstrucción o modificación de inmuebles con valor histórico, permiso sin el cual las autoridades nacionales, departamentales o municipales no podían realizar intervenciones en este tipo de bienes.

Sin embargo, los artículos citados, fueron derogados por el artículo 26 de la Ley 1185 de 2008, por la cual se modifica y adiciona la Ley 397 de 1997 –Ley General de Cultura– y se dictan otras disposiciones, la cual, en el artículo 4² cambió la denominación del Consejo de Monumentos Nacionales a Consejo Nacional de Patrimonio Cultural, encargándolo de asesorar al Gobierno Nacional en cuanto a la salvaguardia, protección y manejo del patrimonio cultural de la Nación.

La mencionada Ley General de Cultura, en el numeral 2º del artículo 11, modificado por artículo 7 de la Ley 1185 de 2008, determinó el régimen especial de protección de los bienes materiales de interés cultural y el inciso 2º del numeral 2º, modificado por el artículo 202 del Decreto 19 de 2012, estableció que la intervención de un bien de interés cultural del ámbito nacional deberá contar con la autorización del Ministerio de Cultura.

De conformidad con la anterior competencia, el Ministerio de Cultura expidió la resolución No. 1710 de 15 de junio de 2017, por medio de la cual autorizó *“el proyecto de intervención en el espacio público denominado “Proyecto de Infraestructura del Plan Bicentenario Fase I y ” (parcial)”, correspondiente a carrera 10 entre calles 13 y 25, calle 19 entre carreras 8 y 13, calle 20 entre carreras 8 y 14, calle 15 entre carreras 10 Y 11, Plaza de Bolívar, Plazoleta de San Ignacio, Plazoleta Pila del Mono y Plazoleta de San Francisco, Municipio de Tunja, Departamento de Boyacá”, localizado en el centro histórico de Tunja, declarado Monumento Nacional, hoy bien de interés cultural del ámbito Nacional.”*; el cual constituye el objeto del contrato de No. 1440 de 21 de

² Por el cual se modifica el artículo 7 de la ley 397 de 1997

noviembre 2017, y prevé como una de las obras a realizar, la construcción de las baterías de baños públicas que son objeto de la presente acción.

En ese orden de ideas, al considerar que el Ministerio de Cultura comparece al proceso en calidad de tercero con interés, no se evidencia la necesidad de vincular al Consejo Nacional de Patrimonio Cultural, por cuanto, dada su naturaleza de órgano asesor, no le asiste ningún tipo de interés en el asunto.

- Del Concejo Municipal de Tunja.

El coadyuvante solicitó la vinculación del Concejo Municipal de Tunja, en aplicación del numeral 9 del artículo 313 de la Constitución Nacional, en razón a que la aprobación jurídica y financiera del Proyecto Plan Bicentenario va ligado a la aprobación del Acuerdo Municipal 019 de 2016. (fl. 165)

En primer lugar, debe resaltarse que si bien concejos municipales son corporaciones político-administrativas que cuentan con autonomía administrativa, presupuestal y financiera; carecen de personería jurídica y por tanto, a la luz de lo previsto en el inciso final del artículo 159 de la Ley 1437 de 2011, no ostentan capacidad para ser parte dentro de un proceso judicial, como ente independiente a la entidad territorial al cual pertenecen.

De otra parte, se encuentra que tal como se advirtió al momento de resolver la solicitud de coadyuvancia, la presente acción se encuentra enmarcada por los derechos colectivos, hechos y pretensiones plasmados por el actor popular, en los cuales no se hace referencia a acción y omisión del Concejo Municipal, en la medida que el origen de los recursos utilizados para efectuar las intervenciones del Centro Histórico de esta ciudad, no fueron puestos en discusión en el escrito introductorio; por consiguiente, tampoco la legalidad u otro asunto referente al Acuerdo No. 019 de 2016.

En ese orden de ideas, al ser improcedente que el coadyuvante reformule la demanda, resulta inadmisibles notificar nuevamente al Municipio de Tunja, para que a través de su representante legal, defienda al ente territorial de nuevos cargos, pues dicho proceder va en contra de principios constitucionales a la legalidad y el debido proceso, lo que conllevará necesariamente a denegar la solicitud del coadyuvante.

- De la Academia Boyacense de Historia.

Adicionalmente, el coadyuvante solicitó vincular al presente proceso a la Academia Boyacense de Historia, para que *“dé concepto peritazgo sobre el Monumento de la Plaza de Bolívar”* (fl. 165).

Al respecto, es preciso señalar que la solicitud carece de fundamento, por cuanto se limita a la petición de un concepto, sin expresar el interés que le podría asistir a la Academia Boyacense en las resultas del proceso, por tanto, vincular a la referida entidad al extremo pasivo del litigio, implicaría una dilación injustificada del proceso.

En consecuencia, la vinculación será negada; no obstante, al momento de decretar las pruebas se estudiara, si es útil, pertinente y conducente decretar el concepto o peritazgo solicitado por el coadyuvante.

En mérito de lo expuesto, el Juzgado Cuarto Administrativo de Oralidad del Circuito de Tunja,

RESUELVE:

PRIMERO.- Admitir la coadyuvancia presentada por el señor Juan Sebastián Ramírez García, pero, únicamente, respecto a los argumentos que guarden relación con los derechos, hechos y pretensiones planteados por el accionante en el escrito introductorio.

SEGUNDO.- Negar la solicitud de vinculación del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural elevada por el actor popular, de conformidad con lo expuesto en la motivación.

TERCERO.- Negar las solicitudes de vinculación del Concejo Municipal de Tunja y de la Academia Boyacense de Historia, efectuadas por el coadyuvante.

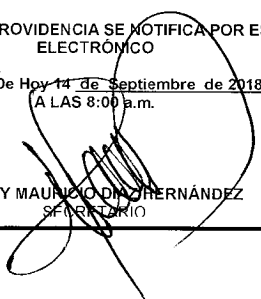
CUARTO.- Una vez el firme la presente providencia, ingrésese el proceso al Despacho para decidir lo pertinente frente al decreto probatorio.

, Notifíquese y cúmplase.


ÁNGELA MARÍA JOJOA VELÁSQUEZ
Juez

³CZ

JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL CIRCUITO DE TUNJA
NOTIFICACIÓN POR ESTADO
LA ANTERIOR PROVIDENCIA SE NOTIFICA POR ESTADO ELECTRÓNICO
N ⁴⁸ De Hoy 14 de Septiembre de 2018 A LAS 8:00 a.m.
FERNEY MAURICIO DÍAZ HERNÁNDEZ SECRETARIO



³ Esta providencia fue notificada en estado electrónico el 14 de septiembre de 2018 en la página web www.ramajudicial.gov.co. Fery Mauricio Díaz Hernández – Secretario.